



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: REINALDO HINCAPIÉ HENAO
Demandado: ESCUELA DE CONDUCCIÓN DANALVIAL LTDA
Radicado: 05001 31 05 008 2019 00195 01
Sentencia: S-018

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia absolutoria de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 03 de diciembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

REINALDO HINCAPIÉ HENAO demandó a la ESCUELA DE CONDUCCIÓN DANALVIAL LTDA, pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 16 de marzo de 2013 y el 17 de octubre del año 2018, y de ello ser así, se ordene

el pago de la indemnización por despido injusto, la indemnización moratoria del artículo 65 del CST por el no pago de las acreencias laborales, al reajuste de las prestaciones sociales y a la sanción por no consignar las cesantías en un fondo destinado para ello, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que ingresó a laborar al servicio de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN DANALVIAL LTDA, a través de contrato de trabajo a término indefinido, como instructor maestro de conducción, el cual tuvo como extremo inicial el 16 de marzo de 2013 y como extremo final el 17 de octubre del año 2018, fecha en la cual presentó renuncia. Que durante la relación laboral recibía órdenes, cumplía horario y devengaba un salario. Que durante el desarrollo del contrato laboró un total de 14 horas extras todas las semanas, con lo que superaba las 48 horas legales establecidas en la semana. Indica también que, a la fecha de presentar la demanda, la demandada aún le adeudaba las prestaciones sociales, consistentes en primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y las vacaciones por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2013 y el 14 de enero del año 2018, sin embargo, manifiesta que estos valores si le fueron cancelados por el período comprendido entre el 15 de enero de 2018 y el 17 de octubre de la misma anualidad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, la sociedad demandada acepta el hecho de haber celebrado un contrato de trabajo con el demandante, pero que este era a término fijo inferior a un año, el cual tuvo como extremo inicial el 15 de enero de 2018 y como extremo final el 15 de enero de 2019, pero que el mismo terminó el 15 de septiembre del año 2018 por renuncia voluntaria del demandante. Que durante ese tiempo le fueron canceladas todas las prestaciones y obligaciones laborales. No

acepta ningún otro hecho. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de mérito que denominó buena fe de la demandada y ausencia de condena en costas, Exagerada e infundada tasación de las pretensiones, Prescripción, Ausencia de causa para pedir y la de Presunción de falsedad del documento privado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 03 de diciembre de 2021, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a la ESCUELA DE CONDUCCIÓN DANALVIAL LTDA. de las pretensiones formuladas en su contra por el señor REINALDO HINCAPIÉ HENAO, a quien CONDENÓ en costas fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora interpone y sustenta el recurso de apelación, indicando que se pudo demostrar con claridad la existencia de una relación laboral, dado que al demandante lo conocían los testigos y los empleadores, que por tanto faltó ponderación de la prueba con la parte más débil que es el trabajador. Es inaudito que pese a que el perito no define que el documento aportado como prueba fuera falso, sino que no podía determinar el hecho, el Despacho, sin manejar la ponderación de que al demandante lo conocía el empleador y los testigos de ambas partes, quienes manifestaron la relación, por lo que solicita al superior haga la ponderación adecuada, ya que el documento que se aportó, el Despacho no hizo una segunda valoración de si es falso o no, pero termina diciendo que el documento es completamente falso, sin manejar el poder que tiene la A-quo de nombrar de manera oficiosa a un nuevo perito dado que el nombrado no tenía competencia ni conocimiento para determinar si el documento aportado como prueba era o no falso. Que el Despacho lo toma como un documento que no

existe, a pesar de que todos los testigos conocían al señor REINALDO HINCAPIÉ HENAO.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término concedido en esta instancia, ninguno de los apoderados presentó alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES:

Por efectos metodológicos, esta Sala estudiará, en su orden, el valor probatorio de la carta laboral aportada por la parte demandante y su idoneidad como documento determinante de la existencia de la relación laboral en los términos alegados en la demanda; y, en segundo lugar, si la a-quo realizó la debida ponderación de la prueba arrimada al proceso y si su actuación estuvo ajustada a derecho. Esto, conforme a los tópicos de la apelación.

Se tiene entonces que la "CERTIFICACION LABORAL" a la que se alude, aportada por el demandante, data del 27 de abril del año 2018, en los términos siguientes:

"Medellín, abril 27 de 2018.

CERTIFICACION LABORAL

*El señor **ARTURO AMAYA RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.463.597 de la ciudad de Bogotá, Representante Legal de CENTRO ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICO DANALVIAL LTDA. con Nit 830.101.315-1.*

CERTIIFICA:

*Que el señor **LUIS REYNALDO HINCAPIÉ HENAO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.083.838 de la ciudad de Medellín, y ocupando el cargo de INSTRUCTOR DE PRACTICAS EN TECNICAS DE CONDUCCION (sic) en nuestra firma CENTRO ENSEÑANZA*

AUTOMOVILISTICO DANALVIAL LTDA. con Nit 830.101.315-1, con un salario de \$1.500.000 (un millón quinientos mil pesos m/cte.), durante el periodo comprendido del 10 de enero de 2013 hasta la fecha y cuenta con un contrato a término indefinido, demostrando durante su permanencia, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que sea conveniente."

De una vez, vale advertir que este documento por sí solo, no define necesariamente la contienda en términos de dar por acreditado, de modo irrefutable, que en efecto el contrato de trabajo se haya iniciado el 10 de enero de 2013, puesto que, no es extraño ni infrecuente que un empleador emita determinados certificados laborales con deliberadas inexactitudes, para diversos fines ante terceros. Práctica que, si bien, naturalmente es repudiable, y pudiera llegar a constituir una falsedad material, desde el punto de vista laboral no excluye el examen de las otras pruebas del proceso.

Si se observa la anterior carta laboral, se encuentran algunas inconsistencias en su texto, como, por ejemplo, que se indique un salario de \$1.500.000 cuando el demandante mismo alega un salario equivalente al mínimo legal vigente (\$869.453 incluyendo auxilio de transporte, hecho 5º), o bien que se diga que la modalidad de duración era a término indefinido, cuando evidentemente, al momento de la emisión de la certificación - 27 de abril de 2018 – ya las partes habían celebrado un contrato a término fijo de un año desde el 15 de enero de ese año. Carece de lógica que un empleador vaya a pre-constituir una prueba que claramente le perjudica, a menos que ello se explique en otra intención de contenido extra laboral.

Dada la importancia que el apelante le atribuye al certificado en cuestión, conviene hacer un recuento detallado de lo sucedió en el proceso al respecto. Esto por cuanto, a su vez, el documento fue tachado de falso por la parte demandada al momento de contestar la demanda, motivo por el cual, la jueza de primera instancia, en la

audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS, dio traslado del mismo a las partes, quienes guardaron silencio. Acudiendo a sus facultades oficiosas, la funcionaria decretó la prueba pericial; el perito designado, señor JOSEPH MARTÍNEZ PEREIRA, emitió el siguiente dictamen:

“Por no encontrarse en original no se podía efectuar un dictamen pericial de fondo que permitiera establecer o descartar uniprocendencia escritural y si presentaba o no alteraciones en su contenido, esto debido a que no fue posible ver el trazado original que permite conocer algunas características del trazo genuino como son el calibre del trazo y la presión, no siendo entonces posible determinar de documentos en fotocopias de baja definición como son las presentadas en el caso a estudio”.

Este dictamen también fue puesto en traslado por el despacho a las partes por el término legal de 3 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del CGP; dispuso además citar al perito para que compareciera a la AUDIENCIA DE TRÁMITE Y JUZGAMIENTO, a efectos de que rindiera el interrogatorio pertinente conforme lo dispone la norma señalada. El citado perito acudió a la audiencia y allí las partes tuvieron la oportunidad de realizarle el interrogatorio de rigor, sin embargo, ninguna de las partes hizo alusión alguna respecto a la falta de competencia o de conocimiento del perito para emitir el dictamen, por lo que la a quo lo declaró en firme, y en audiencia de juzgamiento determinó que dicha “carta laboral” no se podía tomar como prueba para determinar la existencia de la relación laboral en los extremos pretendidos por el actor. Indicó también que dicho documento había sido puesto en traslado y la parte demandante no aportó el documento original, ni realizó objeciones en su debida oportunidad al dictamen. Nótese entonces que la juez de primera instancia resolvió no darle valor probatorio a la mencionada carta laboral, más no la declaró falsa como lo indica el recurrente al momento de interponer su recurso.

Ahora bien, respecto a la posibilidad que tenía la juez de primera instancia de acudir a las facultades oficiosas a efectos de nombrar otro perito que determinara la veracidad o no de la carta laboral, si bien es cierto, el artículo 273 del CGP, señala la posibilidad de nombrar un nuevo perito para que haga un nuevo cotejo, lo cierto es que en este asunto tal prueba era improcedente por cuanto no se aportó el documento original con el que se pudiera hacer el cotejo en debida forma; esto pese a que el dictamen fue puesto en traslado de las partes y a que los apoderados tuvieron la oportunidad de interrogar al perito en audiencia de trámite.

Concede la Sala que el artículo 270, inciso 2º del CGP, dispone que *"Cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez **podrá** exigir que se presente en original"*, sin embargo, en virtud de las facultades dispositivas de las partes, estima la Sala que la obligación principal recaía en la parte demandante quien debió aportarlo en original, a menos que se encontrare en imposibilidad de hacerlo, de lo cual nada se dijo al interior del proceso. Por lo anterior, considera esta Sala que la falta de diligencia en torno a la aportación regular del documento, no es exclusivamente imputable a la juez.

De cualquier forma, se reitera, no es dable fincar la decisión exclusivamente en dicho documento, pues la prueba debe ser admitida, examinada y valorada integralmente. En este orden, se procede con el estudio de los interrogatorios de parte y la prueba testimonial arrimada al proceso a fin de determinar si con ellas se logra demostrar la existencia de la relación laboral en los tiempos indicados en los hechos de la demanda.

Lo anterior no sin tener en cuenta que incumbía al demandante la carga de la prueba de sus aseveraciones de manera que pueda el juez arribar a la conclusión certera acerca de la existencia del contrato de trabajo y sus extremos temporales, para lo cual sería suficiente la demostración, al menos, de **la relación laboral**, que se caracteriza

por la **prestación personal de un servicio**, para que en virtud de lo normado en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presuma la existencia del nexo laboral subordinado, trasladándose la carga de desvirtuar la presunción a la parte opositora.

En el presente caso, la juez *a quo* concluyó, que el demandante no logró probar la existencia de una relación laboral en los extremos temporales propuestos por él, sino que más bien dicho vínculo tuvo lugar en los extremos reconocidos por la parte demandada, esto es, entre el 15 de enero del año 2018 y el 17 de octubre de 2018, por lo que ABSOLVIÓ a la sociedad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, en tanto la liquidación de tal periodo fue acreditada.

Continúa entonces la Sala con la resolución del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, por lo que pasa a analizar los interrogatorios de parte absueltos por las partes y los testimonios arrimados al proceso.

Se tiene que el señor REINALDO HINCAPIÉ HENAO, en el interrogatorio de parte absuelto indicó que efectivamente firmó un contrato de trabajo a término fijo de un año con la demandada, que este contrato tuvo como extremo inicial el 15 de enero de 2018 y final el 15 de enero de 2019, pero que el mismo terminó desde el 17 de octubre de 2018 por renuncia presentada ante el empleador debido a problemas que se empezaron a presentar en dicha fecha. También indicó que, pese a que firmó contrato de trabajo con la demandada en el año 2018, lo cierto es que empezó la relación laboral desde el 16 de marzo del año 2013, pero que inicialmente comenzó su labor de manera verbal para desarrollar la labor de instructor o maestro de conducción, además de desempeñarse en oficios varios. Que durante toda la relación laboral debía cumplir un horario controlado por la señora Katherine Álvarez, secretaria o administradora del negocio. Por

último, indica que el representante legal no permanecía en las instalaciones de la demandada.

El representante legal de la demandada, por su parte, indicó que conocía al demandante desde el año 2016, que lo conoció porque se lo recomendaron para ser instructor de conducción, pero que solo laboró con el desde el mes de enero de 2018 hasta el mes de octubre del mismo año, que dicha relación laboral terminó por renuncia voluntaria del demandante dado que a este se le hicieron dos memorandos por irrespeto a las usuarias que tomaban clases de conducción, que cuando el demandante se enteró que le iban a hacer el tercer llamado entonces decidió presentar renuncia al cargo. También indicó que para el año 2013 aún no conocía al demandante, que solo lo vino a conocer en el año 2016, esto porque durante los años 2016 y 2017 le pagaba al demandante por el alquiler de la certificación de instructor de conducción, ya que para esa época tal trámite era permitido por el Ministerio del Transporte, pero que ya para el año 2018 esto cambió y fue por ello que optó por celebrar con él contrato de trabajo.

En calidad de terceros, declaró la señora LUZ EDILIA VÁSQUEZ LONDOÑO, quien indicó inicialmente que conoce a Reinaldo porque fueron vecinos, además de compañeros de trabajo, razón última por la que también conoce al representante legal de la sociedad demandada. También dijo que se *"imaginaba"* que el demandante había celebrado un de trabajador con el demandado y que dicha relación laboral tuvo inicios en el año 2013, sin dar razón de una fecha cierta. Indicó además que el demandante era el instructor de conducción de la sociedad demandada, que tenía conocimiento que esto se dio desde el año 2013 **porque ella también alquilaba su licencia de instructora de conducción por esa época**, pero hace la claridad que el demandante si era el instructor o maestro de conducción de la Escuela demandada. No obstante brindar tal información respecto de los extremos temporales de la relación que

aduce, lo cierto es que manifiesta desconocimiento respecto del salario que devengaba el demandante por sus servicios. Se destaca además que la deponente al responder los generales de ley, manifestó que conocía al demandante por razón de vecindad, sin embargo, omitió el hecho de que concibió dos hijos con el demandante fruto de una relación habida con éste, situación que solo vino a poner de presente al final de su declaración.

La señora DIANA MARCELA HINCAPIÉ BEDOYA, testigo arrimada al proceso por la parte actora, indicó que conoce al demandante desde hace aproximadamente 20 años, que también conoce al demandado porque laboró al servicio de este como su secretaria en la Escuela de Conducción demandada, pero que el vínculo laboral que sostuvo con la empresa solo tuvo lugar entre los **meses de marzo y junio del año 2016**. No obstante la precariedad de su propio vínculo, dijo que el demandante laboró desde el año 2013 y que se “*imagina*” que dicho contrato se dio de manera verbal. Que las labores a cargo del demandante eran las de instructor, pintor y hasta celador.

La señora MARTA PATRICIA BURITICÁ CARABALLO, afirma que conoce al demandante porque este laboró al servicio de la demandada durante el año 2018, que tal relación se terminó porque las clientas se quejaban por el acoso al que eran sometidas por parte de dicho trabajador, que las usuarias se quejaban ante la secretaria porque él era irrespetuoso, sin embargo, no brinda más detalles respecto de la relación objeto de controversia.

Al examinar la prueba testimonial allegada al proceso, esta Sala concluye que no se arrimó al proceso prueba fehaciente alguna de la que se pueda colegir que efectivamente entre las partes existió una relación laboral entre el 16 de marzo de 2013 y el mes de enero de 2018, y tal como lo indicó la juez de primera instancia en lo que tiene que ver con la declaración de la señora LUZ EDILIA VÁSQUEZ LONDOÑO, esta tampoco ofrece credibilidad para el Despacho, porque

además de ser tachada por sospechosa por la parte demandada en razón al vínculo familiar que la une con el demandante, omitió sospechosamente el hecho de haber concebido dos hijos con el demandante, y si bien para el momento de la declaración ya no existía convivencia entre ellos, de todas manera si tiene un vínculo muy cercano con éste, lo que en sentir de esta Sala le resta valor probatorio tal como lo indicó la juez de primera instancia.

La señora DIANA MARCELA HINCAPIÉ BEDOYA, tampoco aporta elementos probatorios que den cuenta de la existencia de la relación laboral en la forma y los términos aquí deprecados, pues fue escasa su percepción de los hechos que dijo conocer, en razón de que laboró no más de 4 meses a mediados del año 2016.

Queda entonces que la única prueba que se arrima al proceso y que da cuenta de la existencia de la relación laboral entre las partes es la declaración de parte rendida por el demandante, sin embargo, no se puede desconocer que el inciso 2º del artículo 191 del Código General del Proceso consagró una nueva regla sobre la interpretación de esta prueba, al señalar que *“La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”* Es decir, se ubicó la declaración de parte como un medio autónomo de prueba, lo cual se traduce en que le es permitido a las partes rendir su versión de los hechos, declaración que puede ser tomada para beneficio propio y no sólo como confesión, misma que debe ser valorada como cualquier otro medio probatorio, de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, aunque resulte apenas obvio que dada la especial posición que ocupan dentro del proceso judicial, han de ser valoradas con mayor rigor y no menos cautela en cuanto a su coherencia, precisión y claridad, en sinergia con el restante conjunto probatorio procesal.

Bajo el contexto anterior, ha de indicarse que la prueba aportada al proceso, y valorada en conjunto a la luz del artículo 61 del Código

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual le concede al Juez del Trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, y le permite establecer su juicio sobre los hechos debatidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan atendiendo a los principios que orientan la crítica de la prueba, permite concluir que el demandante no logró probar la existencia de una relación laboral en los extremos temporales propuestos en la demanda, pues más bien la relación o vínculo laboral tuvo lugar en los extremos aceptados por la parte demandada, por lo que la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandante, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma \$1.160.000, a favor de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 03 de diciembre de 2021

Costas en esta instancia a cargo del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **11ffc4d055b5d3f81657092f116afaebdc1683fb4d50c54b677c48b47d416d8c**

Documento generado en 09/02/2023 02:28:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>